

E. MIRET MAGDA LENA

CASI no hay día que la prensa española no recoja una noticia, un comentario o unas declaraciones sobre el Concordato de la Santa Sede con España.

Hace varios años —bastantes años— mantuve la tesis en esta revista de que los Concordatos están desfasados. Y que en este país había que superar de una vez nuestras timideces. Mi voz fue prematura, porque nadie —salvo los increíbles— se atrevía a pensar tanto.

Después —en 1971— vino un desencadenarse las intervenciones con motivo del desgraciado proyecto "ad referendum", que se hizo por monseñor Casaroli en Roma. Gracias a una indiscreción se publicó inesperadamente en nuestro país, cuando estaba a punto de firmarse.

La prensa fue unánime en recoger la opinión pública, desfavorable a este anacrónico proyecto, que nada hubiese arreglado sobre el que tenemos ahora. Casi se puede decir que no era ni siquiera un conjunto de paños calientes: hasta en eso era tímido.

Hubo entonces un freno a este proyecto y declaraciones de personalidades a todo nivel que se manifestaron en contra.

Se celebraron coloquios públicos —yo participé en el primero de ellos, en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid—, y en ellos dejaron oír su voz escritores, profesores, religiosos y hasta pastores protestantes. Nadie quería el Concordato de 1953 ni el pretendido arreglo de 1971, que nacía anacrónico y desfasado.

Y en estos casi dos años transcurridos desde entonces, las cosas han ido avanzando a pasos agigantados.

Ni lo quieren los veinticinco progresivos teólogos españoles, que piden "la supresión del llamado privilegio del Fuero", por el cual el clero tiene actualmente un trato de favor ante los Tribunales del Estado, y con ellos están otros muchos eclesiásticos de importancia, que se han manifestado en contra de estos privilegios.

Ni Blas Piñar, que pide reemplazar el Concordato, suspenderlo o llegar a un "modus vivendi" provisorio o sustituirlo por acuerdos parciales.

Ni el ex ministro Ruiz-Giménez, que tanta parte tuvo en la aprobación de este Concordato de 1953, pretende ya que exista nada parecido.

Ni la Conferencia Episcopal Española, que pidió unos acuerdos parciales para sustituir la situación actual, tan anacrónica.

Ni el ministro López Bravo, que declaró recientemente a Mundo: "Creo que un concordato sería conveniente, pero creo también que pueden existir excelentes relaciones entre la Iglesia y el Estado sin necesidad de Concordato", y que ya en 1971 pensaba que estaba "desfasado" el actual.

Tampoco lo quiere nuestro ex embajador en la Santa Sede, Antonio Garrigues, católi-

co equilibradamente abierto, pero que ha jugado sin culpa la peor parte en estos diques y directes concordatarios, a pesar de su buena voluntad.

Recientemente acaban de pasar numerosos obispos por Roma, y han hablado con el Papa de las relaciones Iglesia-Estado y de la actuación de la Conferencia Episcopal en la discutida Asamblea Conjunta del pasado año, que tocó este tema. El Papa, muy claramente, ha dicho que, en conjunto, se encuentran en línea conciliar la mayoría de

UN ASUNTO DESFASADO: EL CONCORDATO

nuestros obispos, aunque algunos conservadores lo duden o lo nieguen, porque creen que han ido más allá; sin embargo, el Papa les aseguró que tenía confianza en la Iglesia de España.

Monseñor Pont y Gol, arzobispo de Tarragona, habló para Radio Vaticano en el mismo sentido. Y el comentarista de la misma dijo que el Papa ha dado "su apoyo pleno y global a la dirección que ha tomado últimamente la Iglesia española". Monseñor Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, un hombre razonablemente abierto, afirmó durante su viaje a la Ciudad Eterna: "Lo que más me ha impresionado es la confianza que el Santo Padre nos ha demostrado".

Pero, ¿qué es lo que pretende el actual conjunto de obispos, en su mayoría? Lo que ha dicho la I Semana de Reflexión Teológica y Planificación Pastoral de Córdoba, bajo la presidencia de su obispo, monseñor Cirarda: una clara independencia de todo poder político, social y económico.

¿Por qué no se alcanza esta meta rápidamente, si todos los españoles de cualquier tendencia y altura estamos dispuestos a conseguir de una vez lo que, siglo tras siglo, no se ha hecho jamás: la clara independencia entre Iglesia y Estado?

Y en este sentido van las declaraciones a ABC del ex embajador Garrigues, que merecen un comentario por su importancia.

Ya no es factible una simple revisión concordataria. Hacerlo sería —como dice el Evangelio— "echar vino nuevo en odres viejos". Incluso "lo probable" —dice Garrigues— es que los Concordatos, con su solemnidad, su rigidez, sus pretensiones de perennidad en tiempos tan acelerados y cambiantes, hayan hecho su tiempo histórico".

En otro párrafo toca Garrigues el punto dígido —en mi opinión— de la cuestión. Dice: "Es hoy sumamente difícil la delimitación puramente eclesial del contenido de la predicación de la palabra de Dios o de la actividad pastoral. Empieza por haber una proyección cristiana sobre la política y sobre las actividades temporales, en general, y sociales, en particular, que no puede ser más saludable. Es, además, una proyección irrenunciable para la Iglesia".

Ahí está el problema: "el cristianismo debe ser un fermento que ceda a toda la masa". Pero el clericalismo —una de sus caricaturas— ya nadie lo quiere, ni las derechas ni las izquierdas. Y quien todavía no se ha liberado de él, poco le falta para hacerlo definitivamente. La Cristiandad medieval, que fue su expresión tradicional, ha terminado, y ya Pío XII —que habló de ello— quería que nunca más volviera. Como tampoco quería Juan XXIII que resurgiera el cesaro-papismo —la otra confusión entre Iglesia y gobernantes—, en la que cayeron los príncipes cristianos del Medievo, que tantos daños ha engendrado en la Historia.

Sin embargo —a pesar del ancho campo de incidencia del Evangelio en la vida—, ya no se puede pretender ni "una política católica" —como pergeñaron nuestros literatos clásicos o el francés Bossuet— ni una doctrina social de la "Iglesia". Son los propios cristianos —como he dicho muchas veces desde estas páginas y ahora repite Garrigues—, los creyentes, sin más calificación eclesiástica, los que "tienen que encarnar temporalmente el cristianismo". Y aun esto —pienso yo como Juan XXIII—, mano a mano de los no creyentes, y sin infusas de superioridad, como tantas veces nos ha ocurrido.

Estas son las ideas de Garrigues, un hombre que quiere un catolicismo abierto, que fue promotor —hace más de diez años— de unas interesantes reuniones de intelectuales católicos, cuando nadie se atrevía, en el plano eclesiástico, a ello.

Ideas difíciles de concretar por su complejidad, pero que lo principal sería que estuvieran en el espíritu de todos, como él pide.

Probablemente se decidan los obispos españoles, en la próxima Conferencia Episcopal, a tratar de ello, a pesar de las vacilaciones que se que tienen en plantearlo a fondo. Si fuese así, ojalá se inspirasen en sus colegas franceses, adoptando el mismo criterio de independencia serena y de modestia clerical, que tanto bien habrá de hacer al país.

Y, sobre todo, decidiéndose de una vez a que sea una realidad el pluralismo de los católicos, defendiendo su libertad de opción en cuestiones terrenas no sólo de palabra, sino con los hechos, como vengo repitiendo insistentemente en mis artículos.